

ITALIA

Paulino César PARDO PRIETO
Prof. Titular de Escuela Universitaria
Universidad de León

SUMARIO

I.- INTRODUCCIÓN.

II.- LA REGULACIÓN SOBRE CULTOS ADMITIDOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ACUERDOS.

III.- EL PROYECTO DE "NORMAS SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y DEROGACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE CULTOS ADMITIDOS".

IV.- LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE SUS ENSEÑANTES.

V.- ANEXOS: "*NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI*" y "*NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO*".

I.- INTRODUCCIÓN.

Es opinión de buena parte de la doctrina italiana, que una gran mayoría de las peticiones confesionales frente al Estado podrían y deberían encontrar acomodo en una regulación de derecho común que las tomara en consideración junto a otras demandas que caracterizan las sociedades actuales, bastaría para ello sobreponer a la idea de un "*derecho común de los cultos*" la idea de un "*derecho común de todos*", en el marco del mayor respeto y realización de los principios de libertad, igualdad, laicidad y pluralismo.

Por más que éste se nos antoje el camino más congruente con los principios supremos de la Constitución italiana, lo cierto es que no es el elegido por el legislador de aquel país, siempre más propenso a convertir en piedra angular del sistema los artículos 7 y 8 del texto constitucional.

En consecuencia con el párrafo segundo del artículo siete de la Constitución, el Concordato lateranense y, desde 1984, en aplicación del párrafo tercero del mismo artículo, el Concordato de Villa Madama, han determinado el *status* de la Iglesia católica. Desde ese año, dando aplicación a lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo octavo, otros seis acuerdos, prácticamente idénticos, el de las iglesias valdense y metodista, adventistas, pentecostales, hebreos, baptistas y luteranos.

Los demás grupos religiosos permanecen dentro de un contexto normativo exclusivamente unilateral. Entre ellos, aún cabe apreciar dos situaciones bien distintas.

Los artículos 19 y 20 de la Constitución y la legislación sobre *cultos admitidos* sirve de marco básico para las iglesias *Ortodoxa Rusa* de Roma y de San Remo, la *Comunidad Armena* (en su variante georgiana), la *Asamblea Bahai de Italia*, el *Centro Islámico Cultural de Italia*, el *Movimiento Evangélico Internacional* de Potenza, la *Congregación Cristiano Evangélica de Italia*, la *Iglesia Cristiano Evangélica Misionaria Pentecostal*, la *Iglesia del Reino de Dios*, la *Iglesia de Cristo* de Milán, la *Iglesia Cristiana Milenarista*, los *Testigos de Jehová*, la *Unión Budista de Italia* y el *Ente Patrimonial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días*. El reconocimiento como *culto admitido* tiene lugar mediante Decreto del Presidente de la República a partir de la solicitud de la confesión interesada y la conclusión de un procedimiento dominado por una fase instructora que puede devenir inacabable, si como afirma FERRARI: "*...en la práctica las demandas de reconocimiento no son nunca rechazadas sino dejadas indefinidamente en suspenso (...). Esta praxis es una de las razones que más han contribuido históricamente a crear un clima de desconfianza entre una parte de las minorías religiosas y la Administración pública*".

Junto a los artículos 19 y 20, el artículo 18 termina por dar cobertura constitucional a la generalidad de las organizaciones religiosas, dentro del precario régimen previsto para las "*asociaciones no reconocidas como personas jurídicas*" por los artículos 36 a 42 del Código civil. A modo de ejemplo: no existe para ellas un registro específico, no disfrutan de las ventajas atribuidas a las confesiones reconocidas en las esferas civil, fiscal o penal, los representantes de la organización responden personalmente de las obligaciones contraídas en el ejercicio de su representación.

Ante tal disparidad de tratamientos no puede extrañar la pretensión del Estado italiano de regular unilateralmente un mínimo común denominador para todos los grupos religiosos. El último intento es el *Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa y derogación de la normativa sobre cultos admitidos* (*Progetto di Legge* n.º. 2531, *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*) que acompañamos a estas líneas como Anexo I.

Si bien el proyecto, una vez convertido en ley, derogará la subsistente normativa de la época fascista, esto no significará que el desigual tratamiento jurídico de unas y otras creencias religiosas —y, más aún, de estas y las que no lo son— tienda a desaparecer.

Al menos eso es lo que cabe deducir de la contemporánea tramitación de otro proyecto —el que presentamos como Anexo II— relativo éste a la posición en el sistema educativo de los profesores de religión católica (*Progetto di Legge* n.º. 2480, *Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*). Con él, los enseñantes de esa materia, la única de carácter estrictamente confesional presente en la escuela italiana, tendrán oportunidad de acceder a contratos laborales con la Administración por tiempo indefinido.

II.- LA REGULACIÓN SOBRE CULTOS ADMITIDOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ACUERDOS.

Al volver la vista atrás, llama la atención comprobar que la publicación de la Ley n.º. 1.159, de 24 de enero de 1.929, sobre *Disposiciones para el ejercicio de los cultos admitidos en el Estado y del matrimonio celebrado por los ministros de esos cultos*, fue valorada, en general, positivamente por las confesiones afectadas, al menos en cuanto permitiría, además de reconocer eficacia jurídica —cumplidos ciertos requisitos civiles— a las celebraciones matrimoniales religiosas acatólicas, salvaguardar sus derechos en materias tan dispares como la erección en entidades, libertad de expresión en materia religiosa o la dispensa de la instrucción católica en las escuelas públicas.

Pero los contenidos de la Ley pronto mostrarán su doble filo y terminarán tornándose en contra de esos cultos, primero como consecuencia de la emanación del R.D. n.º. 289, de 28 de febrero de 1.930 que someterá a autorización estatal y a controles específicos la

apertura de templos y oratorios, las actividades comunes de las entidades confesionales o el ejercicio de sus funciones por los ministros de culto y, después, con la promulgación de normas que tienden a proteger en mayor medida a la *Iglesia del Estado* -como la introducción de los artículos 402 a 406 del Código Penal, que distinguen con penas diversas las ofensas a la religión católica de aquellas dirigidas a los otros cultos- y a restringir las actividades de las confesiones distintas de la oficial, con carácter general, o de algunas de ellas en particular, víctimas de una abierta persecución hacia el final del régimen mussoliniano.

La normativa sobre cultos admitidos contenida en la Ley nº. 1159 de 1.929 y el R.D. nº. 289 de 1.930, junto al Concordato Lateranense, supone el inicio de una época de relaciones con los cultos marcadamente confesional, que se prolongará, en cierta medida, hasta bien entrada la década de los cincuenta, toda vez que la aprobación de la Constitución republicana permitió la persistencia, en contra de lo que pudiera preverse, de un período que LARICCIA caracteriza por el *dominio de la intolerancia religiosa* y prolonga hasta 1955. La razón estaría, a juicio de ese autor, en que la Constitución italiana es la síntesis de un compromiso entre las distintas fuerzas políticas y, en materia religiosa, lo es entre comunistas y democristianos, que pactan una redacción en la que si algunas disposiciones reconocen ampliamente los derechos inviolables de la persona (artículo 2), la igualdad jurídica de los ciudadanos sin distinción de religión (artículo 3), la igual libertad de todas las confesiones religiosas (artículo 8), el derecho de reunión (artículo 17) y de asociación también con fines religiosos (artículos 18, 19, 21) o la prohibición de limitaciones particulares que atiendan al carácter religioso o de culto de cualquier institución (artículo 20), otras como el artículo 7 -por la interpretación que de él hace una parte de la doctrina y de la jurisprudencia- permiten provisionalmente consolidar en Italia un régimen *incompatible con la igualdad y libertad de cultos*, caracterizado por la inaplicación de la Constitución a la legislación preexistente.

La entrada en funcionamiento de la *Corte Costituzionale* sirve para poner coto a tal estado de cosas desde que ya en su primera sentencia, pronunciada el 14 de junio de 1956, considera inaceptable la tesis favorable a aplicar el instituto de la ilegitimidad constitucional únicamente a las leyes posteriores a la Constitución, lo que llevará a la *Corte* a afirmar, en su Sentencia nº. 59, de 18 de noviembre de 1958,

la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 del R.D. n.º. 289 de 1930, iniciando así la depuración de sus preceptos. Algunos años después, la *Corte* estará en condiciones de hacer otro tanto con el derecho de derivación concordataria al resolver que también éste, cuando contravenga los principios supremos del ordenamiento constitucional italiano, puede ser declarado inconstitucional al igual que cualquier otra disposición ordinaria.

Como es sabido, las principales modificaciones en las normas reguladoras de los cultos católico y acatólico no se producirán hasta 1.984, fecha en la cual dará comienzo la denominada "*stagione delle intese*". "*Época de acuerdos*" que ofreció como frutos el Acuerdo de *Villa Madama*, suscrito con la Iglesia Católica el 18 de febrero de 1.984, y cuatro acuerdos más con confesiones distintas de la Católica: los suscritos con la *Tavola Valdese* (aglutinadora de las iglesias valdenses y metodistas italianas), la Unión de las Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día, la Asociación Religiosa de las Asambleas de Dios en Italia y la Unión de las Comunidades Hebreas de Italia.

A esos acuerdos siguió en 1993 la primera reforma de uno de ellos, (la "*Ley Integradora del Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y la Mesa Valdense*", a resultas de un nuevo pacto entre las partes, dirigido a reordenar las deducciones por donaciones realizadas en favor de las entidades integradas en la *Mesa*), y la reanudación de la política de entendimientos con otras confesiones minoritarias, que ofrece, a día de hoy, dos nuevos acuerdos globales promulgados como leyes: Los firmados el 29 de marzo y el 20 de abril de 1.993 con la Unión Cristiana Evangélica Baptista de Italia (U.C.E.B.I.) y con la Iglesia Evangélica Luterana en Italia (C.E.L.I.), respectivamente.

Completan el vigente marco legal "*acordado*" otras dos leyes modificadoras de las *intese* suscritas con la Unión Italiana de las Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día y la Unión de las Comunidades Hebreas de Italia, en las cuales se determina la participación de uno y otro grupo en el reparto del 0'8% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las diferencias entre el modelo español de acuerdos y el italiano son muchas y han sido puestas de relieve por la doctrina de uno y otro país.

A nuestros efectos conviene destacar, especialmente, que los acuerdos italianos, ya sean con la católica o con las demás iglesias, constituyen el cauce general para la articulación de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. Todos esos acuerdos han servido para hacer efectivos los mandatos de los artículos 7 y 8 de la Constitución italiana y no puede olvidarse, como dice PEYROT, que: "*...mientras con los artículos séptimo, párrafo primero, y octavo, párrafos primero y segundo, vienen afirmados principios que podrían determinar, considerados aisladamente, también la actuación de un sistema político de separación entre Estado e iglesias, con las siguientes disposiciones, el párrafo segundo del artículo séptimo y el tercero del artículo octavo, la Constitución precisa, en cambio, que las citadas relaciones sean establecidas según un modelo político de coordinación".*

Un modelo, este de "*coordinación*", en el que la Iglesia Católica sigue ocupando una posición preferente, en el que otras confesiones han accedido mediante una solución bilateral a la superación de la normativa de finales de los años veinte y a acercar su situación jurídica a la de aquella y en el que el resto de las confesiones no participan por causas que son absolutamente ajenas a ellas.

Un modelo, el resultante, en el que las "*intese*" van completando un derecho singular que acentúa las discriminaciones entre unos y otros creyentes al tiempo que sirven para envolver con una patina de legitimidad lo concordado con la Iglesia católica. Incluso, algunos autores detectan que todos los acuerdos priman la "*libertad de los grupos*" más allá de las "*libertades de los fieles creyentes*", esto es, que los acuerdos son instrumento decisivo para el reforzamiento de intereses institucionales y no únicamente cauce para arbitrar respuestas normativas adecuadas a las necesidades de los ciudadanos a quienes las confesiones representan.

Pero, a juicio de una parte de la doctrina italiana, este tipo de acuerdos responden, además, a la obligación y mandato que resulta del tenor literal del artículo 8, párrafo tercero, de la Constitución, que subordinaría la legitimidad constitucional de cualquier ley reguladora de la relación Estado - Iglesias no católicas a la suscripción previa de *intesa*, al punto de que ésta se transforma en elemento esencial en la formación de la ley, en "*verdaderos elementos constitutivos, indispensables e insustituibles, del propio procedimiento*", que, a *posteriori*, tampoco podrán derogados, total o parcialmente por leyes

ordinarias que no hayan seguido el mismo proceso bilateral de producción.

La concertación del Estado con las iglesias, pues, no es asimilable a la desarrollada por el Estado español. A diferencia de lo que ocurre en la Constitución italiana vigente -que constitucionaliza el principio de bilateralidad en la regulación de las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y con el resto de las confesiones-, en nuestro sistema, como destaca LLAMAZARES, los artículos 9, apartado segundo, y 16, apartado tercero, constitucionalizan la obligación de los poderes públicos de "*cooperar*" y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa consolida los acuerdos como uno de los posibles cauces para esa política.

Es decir, los acuerdos españoles obedecen a una cierta concepción de la política legislativa, lo que vale tanto para la Iglesia católica como para las restantes confesiones. Es indudable, no obstante, que la prueba más clara de ello son los acuerdos celebrados con CIE, FCI y FEREDe en 1992 en los que, por ejemplo, el Gobierno no viene comprometido sino a informar a las federaciones confesionales respecto de las variaciones normativas que afecten a sus contenidos.

III.- EL PROYECTO DE "NORMAS SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y DEROGACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE CULTOS ADMITIDOS".

El proyecto de Ley presentado ante la *Cámara de los Diputados* el 18 de marzo de 2002 por el Gobierno BERLUSCONI es deudor del que durante la anterior legislatura presentara, sin llegar a concluir toda su tramitación, el 3 de julio de 1997 el Gobierno de centro izquierda.

Algunas de las variaciones que se han introducido en el de 2002 no deben dejar de ser tenidas en cuenta.

El apartado segundo del artículo cuarto, al referirse a los hijos menores de edad, se limitaba a decir en el anterior proyecto: "*Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 316 del Código civil, los menores, a partir de los catorce años de edad, pueden adoptar independientemente decisiones propias del derecho de libertad religiosa*". Por su parte, el proyecto último añade seguidamente una cláusula que resultará cuando menos clarificadora: "*(...); en caso de diferencias entre los padres decide el juez competente, teniendo en cuenta el interés del menor*".

En el de este año, se incorporan tres artículos que no estaban en el texto de 1997. Dos de ellos, relativos a la libertad religiosa en los lugares de trabajo (artículo 9) y a la tutela de los edificios de culto (artículo 14), poco o nada aportan al derecho estatal preexistente: aquel se remite a "*las disposiciones vigentes en la materia*" y los "*convenios colectivos y contratos individuales*", mientras que éste se limita a garantizar a las confesiones que sus lugares de culto "*no pueden ser ocupados, requisados, expropiados o demolidos*" salvo por "*graves razones*" y después de "*oídas*" las legítimas representaciones confesionales.

El otro, en cambio, sobre "*sepultura de los difuntos*" (artículo 23) sí garantiza en mayor medida, aún siempre dentro del Derecho común aplicable, que "*...la sepultura tenga lugar con respeto hacia las prescripciones rituales de la confesión o asociación religiosa (...)*".

Más importante es la presencia en el proyecto actual de derechos favorables a los ministros de culto de confesiones religiosas sin personalidad jurídica reconocida, quienes, en el caso de disponer de la ciudadanía italiana, podrán realizar las actividades propias de los ministros de culto de las confesiones dotadas de personalidad jurídica siempre que: "*(...) su nombramiento haya sido aprobado por el Ministro del Interior*" (artículo 10.3). En ese caso, podrán celebrar matrimonios con eficacia civil (artículo 11, apartados 1 y 5).

Por contra, se echan en falta los contenidos del que fuera artículo 22 en el precedente, en el cual se previó que las personas físicas pudieran deducir en el Impuesto sobre la Renta las donaciones dinerarias realizadas en favor de confesiones religiosas con personalidad jurídica hasta la cuantía de dos millones de liras (1033 □). Sí se ha mantenido, en cambio, la equiparación a efectos tributarios de las confesiones religiosas y sus actividades de religión y culto —definidas en el artículo 26, letra a)— a las entidades y actividades benéficas y de instrucción (artículo 25), las ayudas directas para la construcción de lugares de culto (artículo 22) y la posibilidad de que los ministros no católicos puedan incorporarse al Fondo de Previsión contemplado en la Ley n.º. 903 de 22 de diciembre de 1973 (artículo 27).

A pesar de que el título del proyecto de 2002 queda referido - como sus predecesores- a "*normas sobre la libertad religiosa*" su

objeto es más amplio como evidencia su Capítulo Primero, titulado "*Libertad de conciencia y de religión*" (artículos 1 a 14).

Bajo ese epígrafe, el artículo primero rápidamente corrobora que las normas contenidas en el mismo se enmarcan dentro de la más general libertad de conciencia tal y como ésta: "*...es garantizada a todos de conformidad con la Constitución, las convenciones internacionales sobre los derechos inviolables del hombre y los principios generalmente reconocidos en la materia*".

El artículo segundo delimita qué ha de entenderse por *libertad de conciencia y religión*: "*(...) comprende el derecho a profesar libremente la propia fe religiosa o creencia, en cualquier forma, individual o asociadamente, a difundirla y propagarla, a observar los ritos y ejercitar el culto en privado o en público. Comprende, entre otros, el derecho a cambiar de religión o creencia o a no tener ninguna. No pueden ser establecidas limitaciones a la libertad de conciencia y religión distintas de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Constitución*". El tercero, subraya que: "*Nadie podrá ser discriminado o estar sujeto a limitaciones por razón de la propia religión o creencia, ni ser obligado a efectuar declaraciones relativas concretamente a su pertenencia confesional*".

El artículo cuarto, apartado primero, reconoce el derecho de los padres: "*(...) a instruir y educar a los hijos (...) coherentemente con su fe religiosa o creencia, dentro del respeto de su personalidad y sin daño para la salud de los mismos*"; el artículo 12 determina que: "*En las escuelas públicas (...) la enseñanza será impartida dentro del respeto a la libertad de conciencia y la igual dignidad sin distinción de religión*"; el artículo quinto, que: "*Los derechos de reunión y asociación previstos en los artículos 17 y 18 de la Constitución pueden ejercitarse libremente también para fines de religión o de culto*"; el artículo sexto, apartado primero, en fin, que: "*La libertad religiosa (...) comprende el derecho a pertenecer libremente a una confesión o asociación religiosa o a abandonarla, así como el derecho a participar, sin injerencias del Estado, en la vida y la organización de la confesión religiosa (...) de conformidad con sus reglas*".

Todos esos artículos, dan cuenta de la interrelación entre derechos que forman parte de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, algo que ha puesto de relieve la doctrina española en relación a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Otro tanto ocurre en el artículo séptimo donde se explicita el derecho de todos los ciudadanos "...a actuar según las normas ineludibles de la propia conciencia, dentro del respeto de los derechos y deberes sancionados por la Constitución" (apartado primero del artículo 7), como también en el artículo 15 -el primero del Capítulo dedicado a las "*Confesiones y Asociaciones religiosas*"- donde al enumerar qué derechos comprende la "*libertad de las confesiones religiosas*" repite en gran parte -situando ahora el punto de vista en los grupos- los que ya designara en el Capítulo I entre los derechos que forman parte de la libertad de conciencia y de religión: derecho a celebrar los ritos y a propagar, difundir y promover la fe y los valores culturales respectivos (artículo 2), a formar y nombrar ministros de culto, a emanar disposiciones (artículo 6), a facilitar asistencia espiritual (artículo 8) y a comunicarse libremente con las organizaciones propias u otras confesiones religiosas (artículos 5 y 6).

En este punto, el proyecto desaprovecha una gran ocasión para sistematizar adecuadamente los derechos que corresponden a una y otra libertad y ordenar qué deba ser derecho común general y qué derecho especial o singular en la materia.

Del Capítulo Segundo (artículos 15 a 27), interesa destacar que los artículos 16 a 19 concretan el *iter* que han de seguir las confesiones para obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica como tales. Éste, tendrá lugar por decreto del Presidente de la República, a propuesta del Ministerio del Interior (ante quién se presentará la solicitud), oído el parecer del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros; el proceso se completará con la inscripción del grupo o la entidad que lo represente en el registro correspondiente, requisito *sine qua non* para que pueda disponer de plena capacidad de obrar.

En el proceso de reconocimiento, la confesión o la entidad deberá acreditar su domicilio en Italia, así como el de su representante que, necesariamente, será un ciudadano italiano (artículo 17.2); acompañará a la solicitud documentos que permitan constatar su denominación y sede, normas de organización, administración y funcionamiento y cuántos datos permitan valorar su carácter estable, su base patrimonial y la conformidad de su estatuto con el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales (artículos 17.1 y 18).

Resta por ver si con esta regulación, sólo parcialmente novedosa, se salvarán los inconvenientes que, como dijimos, la doctrina italiana ha detectado en el régimen vigente. La complejidad de un procedimiento que requiere nada menos que la intervención del Ministerio del Interior, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Presidente de la República nos hace dudar que suponga un gran avance.

El Capítulo Tercero (artículos 28 a 37) contempla la "*Estipulación de acuerdos a los efectos del artículo octavo de la Constitución*".

El procedimiento queda abierto a todas las confesiones, aunque no tengan reconocida como tales personalidad jurídica, si bien en este caso el Ministerio del Interior y el Consejo de Estado deberán intervenir para verificar -sobre la base de la documentación exigida para el reconocimiento de la personalidad en el artículo 18- la conformidad del estatuto confesional con el ordenamiento italiano (artículos 28 y 29).

La negociación comenzará a propuesta de la confesión dirigida al Presidente del Consejo de Ministros quién, de aceptar esta solicitud, la invitará a designar su representación (artículo 30); el Gobierno, por su parte, estará representado por su Presidente que, a su vez, delegará en el Secretario del Consejo de Ministros la dirección de las conversaciones (artículo 31). Una *Comisión de Estudio* integrada por altos cargos del Ministerio del Interior (el Jefe del *Departamento para las Libertades Civiles e Inmigración* o la persona en quien él delegue) y de las demás administraciones interesadas así como por expertos italianos designados por la confesión preparará el proyecto que sirva de base para la confección del acuerdo (artículo 32).

Redactado el proyecto de *intesa*, el Presidente del Consejo lo someterá a la deliberación del Gobierno e informará del mismo al Parlamento (artículo 33) y, si lo estima necesario a la vista de las observaciones formuladas por uno y otro, requerirá de su delegado y de la *Comisión de Estudio* las oportunas modificaciones antes de concurrir a su firma y presentarlo a las Cámaras para la aprobación de la correspondiente Ley (artículos 34 a 36).

El procedimiento hasta aquí descrito no es la única opción para los acuerdos entre Estado y grupos religiosos, se prevé también el eventual desarrollo de leyes unilaterales estatales a partir del pacto con

las confesiones cuya personalidad jurídica ya hubiera sido reconocida cuando éstas tuvieran interés en la materia (artículo 37).

Como vemos son definitivamente excluidos de este tipo de *entendimientos* los grupos no confesionales.

Por último, el Capítulo Cuarto (artículos 38 a 42), sirve para que la Ley garantice provisionalmente a las entidades religiosas *reconocidas* a la fecha de su entrada en vigor dicho carácter aún cuando deberán solicitar la inscripción registral en el plazo de dos años para seguir disfrutando de los beneficios en ella previstos (artículo 38 en relación al artículo 19), consolide el régimen jurídico y asistencial de los ministros de culto cuya condición ha sido aceptada a efectos civiles conforme a la normativa sobre cultos admitidos (artículo 39), restrinja la aplicabilidad de sus contenidos respecto de las confesiones extranjeras (artículo 40), confirme que el nuevo texto no modifica ni condiciona lo dispuesto en los acuerdos suscritos con la Iglesia católica u otras confesiones (artículo 41) y derogue la Ley de 24 de junio de 1929 y el Real Decreto de 28 de febrero de 1930 (artículo 42).

IV.- LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE SUS ENSEÑANTES.

Convergen en este ámbito, dominado tradicionalmente por la confluencia de los intereses de Estado y confesiones, la normativa unilateral estatal y la emanada de común acuerdo con la Iglesia Católica y con las confesiones no católicas.

Particular relieve asume aquí lo pactado con la Iglesia católica a quien el artículo 9.2 del Concordato de Villa Madama garantizó "*la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas no universitarias*", posponiendo el numeral quinto de su Protocolo Adicional a un ulterior convenio entre las autoridades escolares y la Conferencia Episcopal Italiana la configuración de los diversos programas de enseñanza, la fórmulas concretas para su impartición y su ubicación horaria, los criterios para la elección de los libros de texto y, finalmente, el perfil y cualificación de los enseñantes. Dicho

acuerdo fue suscrito por el Ministro de Instrucción Pública y el Presidente de la Conferencia Episcopal el 14 de diciembre de 1985.

Las otras confesiones con *intese*, por su lado, no disponen de la posibilidad de enseñar su respectiva creencia en condiciones similares a la Iglesia mayoritaria pero sí incluyeron en sus respectivos acuerdos el reconocimiento del derecho de los alumnos a no servirse de otras enseñanzas religiosas y a que estas tuvieran lugar en horarios y condiciones que no resultaran discriminatorias.

El sentido de la normativa aplicable ha sido progresivamente clarificado por la intervención de los tribunales ordinarios y la Corte Constitucional con respecto, esencialmente, al ejercicio del derecho a *servirse o no* de la enseñanza religiosa católica y a la caracterización de la relación con la administración educativa de los enseñantes de esa doctrina.

En cuanto a lo primero, la *Corte Constitucional* señaló a finales de los ochenta que la imposición de una alternativa a la clase de religión ha de considerarse una medida discriminatoria, pues "*...sólo el ejercicio del derecho a 'servirse de la lección de religión católica' crea la obligación escolar de la asistencia*", mientras que "*...para cuantos deciden no servirse de ella, la alternativa es un estado de no - obligación*". Afirmación que precisará aún más cuando en 1991 argumente que la libertad religiosa queda garantizada cuando hay posibilidad de escoger "*...entre un si o un no, entre una opción positiva y una opción negativa; el servirse o no servirse (...)*", de manera que "*...las distintas formas de ocupación escolar, alternativas a la lección de religión católica, presentadas a la libre elección de los que deciden no servirse de la misma, no tienen en absoluto relación con la libertad religiosa*", siendo también "*...innegable que 'el estado de no-obligación' puede comprender, entre otras, la opción de alejarse o ausentarse del edificio de la escuela*".

En lo referente a los profesores de religión católica, se ha pronunciado últimamente en Sentencia de 13 de octubre de 1999 donde resuelve una cuestión planteada por el Tribunal Administrativo Regional de Sicilia sobre la legitimidad constitucional de las normas que impiden a los profesores de religión católica disfrutar de unas condiciones laborales similares a las de los docentes de cualquier otra disciplina. Para el Tribunal Administrativo la renovación anual de estos profesores podría estar significando la vulneración del principio de igualdad del artículo 3 de la Constitución; carecería de justificación

suficiente excluir a este tipo de profesores de la estabilidad en el empleo y con dicha exclusión, además, podrían estarse lesionando el derecho al trabajo de los artículos 4 y 35 de la Constitución y los principios que deben presidir la actividad de la Administración Pública contemplados en el artículo 97 de la Norma Fundamental.

La *Corte* declara no fundada la cuestión en torno al artículo 3 por entender que la relación laboral de los profesores de religión responde a una de las modalidades contempladas por la normativa vigente y, por más que el operador jurídico estatal pudiera haber optado por otras, en su elección no ha actuado de forma arbitraria o irrazonable sino atendiendo a los compromisos pacticios y a las peculiaridades de la enseñanza. Igualmente infundadas resultan las siguientes: los artículos 4 y 35 reclaman de los poderes públicos la promoción de las condiciones que permitan la realización efectiva del derecho al trabajo pero no garantizan una ocupación y el artículo 97 no impone un modelo organizativo inflexible sino que, por el contrario, admite una pluralidad de regulaciones atendiendo a las distintos tipos de trabajadores.

No obstante la anterior doctrina constitucional, en julio de 2000 iniciaba su tramitación parlamentaria un proyecto de Ley sobre selección y estatuto jurídico del profesorado de religión católica con la intención de poner en marcha un concurso público para cubrir de forma estable, con personal a tiempo completo o parcial, una parte de las plazas previsiblemente necesarias en los próximos años para garantizar la impartición de la asignatura así como condiciones plenamente equiparables a los demás profesores a los enseñantes seleccionados.

Con la misma pretensión, apoyándose fundamentalmente en ese proyecto de la pasada legislatura y bajo la cobertura jurídica del Acuerdo de Villa Madama, su Protocolo Adicional y la *intesa* Ministerio de Instrucción Pública - Conferencia Episcopal, se tramita ahora ante el Parlamento italiano este Proyecto de Ley que acompañamos como Anexo II.

En éste de ahora, para acceder a los contratos laborales por tiempo indefinido ofertados en el concurso, los candidatos deberán superar unas pruebas y valoraciones objetivas –de inferior dificultad a las habituales en los concursos generales- y, finalmente, recibir el reconocimiento por la autoridad eclesiástica de su *idoneidad* (artículos 3 y 5). Si obtenido el empleo ésta llegara a ser revocada, el enseñante

dispondrá de la facultad de integrarse en otra área de conocimiento cuando lo permita su cualificación profesional- (artículo 4, apartado tercero).

El texto que adjuntamos contiene la redacción dada en fecha de 24 de septiembre de 2002 al Proyecto de Ley número 2480, sobre el *régimen de los enseñantes de Religión Católica*, por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, tras la aprobación de las correspondientes enmiendas.

ANEXO I

NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI

[Progetto di legge n. 2531;
Disegno di legge presentato il 18 marzo 2002]

Capo I

LIBERTA' DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

Art. 1.

(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione).

La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.

Art. 2.

(Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione).

La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.

Art. 3.

(Divieto di discriminazioni).

Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Art. 4.

(Figli minori).

1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.

Art. 5.

(Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto).

I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.

Art. 6.

(Partecipazione a confessioni o associazioni religiose).

1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.

2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che esercitino i diritti di cui al comma 1.

Art. 7.

(Libertà di coscienza).

1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione.

2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.

Art. 8.

(Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni).

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.

2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza.

Art. 9.

(Libertà religiosa nei luoghi di lavoro).

1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.

2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli articoli 1, 2 e 3.

Art. 10.

(Ministri di culto).

1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.

2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria

qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposta certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.

3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.

Art. 11.

(Matrimonio).

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3, devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello

stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "dei culti ammessi nello Stato" sono sostituite, dalle seguenti: "delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno". Nella rubrica del medesimo articolo le parole: "ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dal cattolico".

6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 12.

(Insegnamento nelle scuole).

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.

2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 13.

(Pubblicazioni).

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

Art. 14.

(Tutela degli edifici di culto).

Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.

Capo II

CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

Art. 15.

(Libertà delle confessioni religiose).

La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

Art. 16.

(Riconoscimento della personalità giuridica).

La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 17.

(Domanda di riconoscimento).

1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

Art. 18.

(Requisiti per il riconoscimento).

Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale, accerta, in particolare, che lo statuto non

contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 19.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la confessione o l'ente esponenziale può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Art. 20.

(Mutamenti della confessione religiosa).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 21.

(Acquisti delle confessioni religiose).

Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 22.

(Edilizia di culto).

1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione

secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.

2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

Art. 23.

(Sepoltura dei defunti).

Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.

Art. 24.

(Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto).

Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.

Art. 25.

(Regime tributario delle confessioni religiose).

La legge dispone i casi nei quali agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 26.

(Attività di religione o di culto).

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 27.

(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica).

I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possono iscriversi al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Capo III

STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE

Art. 28.

(Istanza per l'intesa).

Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 29.

(Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica).

Se l'istanza è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.

Art. 30.

(Rappresentanza delle confessioni religiose).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta.

Art. 31.

(Rappresentanza del Governo).

1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 32.

2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.

Art. 32.

(Commissione di studio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima fascia o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 33.

(Deliberazione del Consiglio dei ministri).

Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui principi e sui contenuti del progetto stesso.

Art. 34.

(Eventuali modifiche).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al

Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.

2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 33.

Art. 35.

(Firma dell'intesa).

Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.

Art. 36.

(Disegno di legge di approvazione dell'intesa).

Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.

Art. 37.

(Applicazioni di leggi su specifiche materie).

Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

Art. 38.

(Confessioni religiose già riconosciute).

Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o riconosciuti quali enti di culto in base ad altre disposizioni, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929).

I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio

decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.

Art. 40.

(Persone giuridiche straniere).

Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II.

Art. 41.

(Accordi e intese già stipulati).

1. Le norme della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 42.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

ANEXO II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI
RELIGIONE CATTOLICA
DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO

**[Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)**

Camera dei Deputati - XIV Legislatura]

Art. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente

della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.

(Acceso al ruolo).

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1 comma 1, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le norme dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione organica di cui all'articolo 2. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nella dotazione organica durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto 2.5 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 4.

(Mobilità).

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali).

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione. Resta altresì fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.680.750 euro per l'anno 2002 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

